



SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Radicado: 05001-31-05-013-2022-00195-01 (O2-23-211)
Accionante: GLORIA CECILIA ARIAS ZAPATA
Accionada: JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y COLPENSIONES E.I.C.E.
Procedencia: JUZGADO TRECE LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN
Providencia: SENTENCIA No. 026
Asunto: NULIDAD DICTAMEN - PENSIÓN DE INVALIDEZ

En Medellín, a los dieciocho (18) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024), la **Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín**, integrada por los magistrados MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ, CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES y VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO, quien actúa como Magistrado Sustanciador, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL conocido bajo el radicado único nacional 05001-31-05-021-2020-00199-01 (O2-23-157), instaurado por GLORIA CECILIA ARIAS ZAPATA en contra de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ y COLPENSIONES E.I.C.E., con el fin de resolver el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de la entidad oficial, respecto de la sentencia que selló la primera instancia, proferida el 1º de septiembre de 2023 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín.

De conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, “[p]or medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020, y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones”, se adopta la decisión correspondiente mediante la presente providencia escrita, cuya ponencia fue previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

1. ANTECEDENTES

La señora GLORIA CECILIA ARIAS ZAPATA, actuando a través de gestor judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA – JRCIA, JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ – JNCI y COLPENSIONES E.I.C.E., en procura de que se declare la nulidad de los dictámenes

nros. DML896 de 2020 y 43092716 de 2022, emitidos, en su orden, por COLPENSIONES E.I.C.E. y la JNCI, para en consecuencia, obtener el reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común y a cargo de COLPENSIONES E.I.C.E., a partir del 15-jul-2017 o, de forma sucedánea, a partir del 21-feb-2019. De igual manera, reclama el pago de los intereses de mora sobre las mesadas pensionales adeudadas, la indexación, lo ultra y extra petita.

En respaldo de sus aspiraciones, indicó que nació el 22-nov-1963 y que presenta las patologías de “...OSTEO ARTROSIS EROSIVA, DIABETES MELLITUS INSULINODEPENDIENTE CON OTRAS COMPLICACIONES ESPECIFICADAS, EPISODIO DEPRESIVO, ESPONDILOLISTESIS, FIBROMIALGIA, GONARTROSIS PRIMARIA BILATERAL, HIPERTENSIÓN ESENCIAL PRIMARIA, LUMBAGO NO ESPECIFICADO, OBESIDAD NO ESPECIFICADA, VARICES EN OTROS SITIOS ESPECIFICADOS”. Afirmó que, la administradora del RPMPD y los demás organismos demandados calificaron su estado de salud, en los términos que se detallan:

ENTIDAD CALIFICADORA	IDENTIFICACIÓN DEL DICTAMEN	PORCENTAJE DE PCL ASIGNADO	FECHA DE ESTRUCTURACIÓN
Colpensiones E.I.C.E.	Dictamen nro. DML 896 de 2020	38,39%	19-ago-19
Junta Regional de Calificación de Invalidez de Antioquia	Dictamen nro. 089047 del 06-feb-2020	52,12%	21-feb-19
Junta Nacional de Calificación de Invalidez	Dictamen nro. 43092716 del 25-feb-2022	47,35%	21-feb-19

Afirmó que, por encontrarse en desacuerdo con el resultado de las valoraciones realizadas por las convocadas a juicio, se sometió a un proceso de calificación con la IPS Universitaria, entidad que determinó que presentaba un 62,92% de PCL y fijó la fecha de estructuración del estado de invalidez el 15-jul-2017. De ahí que, colige que cumple con los requisitos mínimos exigidos para ser beneficiaria de la pensión de invalidez, de cara al dictamen emitido por la IPS Universitaria ora por la JRCIA.

1.1. Trámite de primera instancia

La demanda se admitió el 19 de mayo de 2022 (doc.03, carp.01), y sólo las demandadas JNCI y COLPENSIONES E.I.C.E dieron contestación al libelo gestor oportunamente (docs.13 y 16, carp.01), dándose aviso de la existencia del presente proceso a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y a la Procurador Judicial Delegado para Asuntos Laborales el 28 de junio de 2022 (docs.07 a 10, carp.01).

COLPENSIONES E.I.C.E. (doc.13, carp.01), entidad que luego de tener por cierta la edad de la demandante y las resultas de los dictámenes de calificación de PCL practicados, junto con la respuesta brindada a la reclamación administrativa, se opuso a la prosperidad de los pedimentos con la formulación de las excepciones perentorias de firmeza del dictamen de pérdida de capacidad laboral, inexistencia de la obligación de reconocer y pagar la pensión de invalidez de origen común, inexistencia de obligación de pagar intereses moratorios, improcedencia de la indexación, prescripción, presunción de legalidad de los actos administrativos, imposibilidad de condena en costas, compensación y la genérica.

La JNCIA planteó oposición a las reclamaciones impetradas en su contra, presentando como medios defensivos las excepciones de fondo que denominó legitimidad del pronunciamiento expedido por la junta nacional como calificador de segunda instancia, la modificación de los presupuestos facticos de la calificación exime de responsabilidad a la entidad – cumplimiento del debido proceso y los presupuestos legales, improcedencia de las pretensiones: autonomía técnica de la junta nacional para emitir los dictámenes sobre la pérdida de capacidad laboral y buena fe de la parte demandada (doc.16, carp.01).

1.2. Decisión de Primera Instancia

La controversia planteada se dirimió en primera instancia el 1º de septiembre de 2023 (docs.51 y 52, carp.01), mediante sentencia proferida por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, en la que dispuso dispensar el derecho pensional a favor de la señora GLORIA CECILIA ARIAS ZAPATA y a cargo de la administradora del RPMPD; prestación que reconoció de manera indexada desde el 21-feb-2019 y en cuantía inicial de un salario mínimo legal mensual vigente, absolviendo de los demás pedimentos.

Para sustentar su decisión, la cognoscente de primer grado, *grosso modo*, prescindió del dictamen adosado con el escrito demandatorio pues los discernimientos expuestos por el perito José William Vargas Arenas no encontraron asidero en la historia clínica o en las pruebas científicas y diagnósticas que reposan en la historia clínica de la promotora. Por ello, otorgó plena validez a la pericia practicada por la Facultad de Salud Pública de la Universidad de Antioquia, la que encontró acorde con la historia clínica copiada en el tracto procesal y al real estado de salud de la señora GLORIA CECILIA ARIAS ZAPATA. Ulteriormente, recabó que la demandante cumple con los elementos imperativos que dimanen de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003, para acceder a la prestación de invalidez (minutos 01:34:20 a 02:14:05, doc.52, carp.01).

1.3. Grado Jurisdiccional de Consulta

Teniendo en cuenta que la decisión adoptada en primera instancia, fue adversa a los intereses de COLPENSIONES E.I.C.E., la sentencia será examinada bajo el grado jurisdiccional de consulta en su favor, atendiendo que no fue objeto de alzada

1.4. Trámite de Segunda Instancia

El grado jurisdiccional de consulta se admitió el 02 de octubre de 2023 (doc.02, carp.02), y mediante proveído de la misma fecha se corrió traslado a las partes para que, de conformidad con lo previsto en el numeral 1º del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, presentaran los alegatos de conclusión por escrito, de así estimarlo; siendo que la parte demandante se mostró conforme con la sentencia de primer nivel, solicitando se confirme por la Corporación; entretanto, los demás contendientes guardaron silencio.

2. ANÁLISIS DE LA SALA

Surtido el trámite en esta instancia, sin observar causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a estudiar en su integridad el fallo de instancia en el Grado Jurisdiccional de Consulta a favor de COLPENSIONES E.I.C.E., conforme con el artículo 69 del CPTSS.

2.1. Problema jurídico

El *thema decidendi* en el asunto puesto a consideración de la Sala se contrae a establecer si a la señora GLORIA CECILIA ARIAS ZAPATA le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión de invalidez de origen común a partir del 15 de julio de 2017 o, desde el 21 de febrero de 2019, efecto para el que será necesario determinar en el asunto puesto a la palestra, la validez y eficacia del dictamen de PCL traído con la demanda como sustento cardinal de los pedimentos instados y conforme a los principios que informan la sana crítica. Asimismo, apuntalado lo anterior y de ser necesario, la Sala fincará su análisis en establecer si concurren los requisitos legales para que la afiliada cause y entre al disfrute de la referida prestación, con arreglo a las premisas normativas y criterios jurisprudenciales que rigen la materia.

2.2. Sentido del Fallo – Tesis de la Sala

La Sala confirmará íntegramente la decisión de primer grado, considerando que como colofón del ejercicio ponderativo entre la prueba pericial allegada con la demanda y los demás medios suasorios incorporados y practicados en sede judicial, deben acogerse las conclusiones que dimanen del dictamen practicado en sede judicial por parte de la Facultad de Salud Pública de

la UdeA, como quiera que, la valoración técnico-científica llevada a cabo por el médico especialista José William Vargas Arenas no se acompasa con los lineamientos vertidos en el Manual Único para la Calificación de la Invalidez - MUCI que se encontraba vigente para la época de la evaluación, en franca infracción a las disposiciones legales que reglamentan la materia, como se explicitará a continuación:

2.3. Solución del Problema Jurídico Planteado

La carga de la prueba es un principio de derecho procesal, encaminado a establecer a cuál de los sujetos del proceso le concierne la aportación de las pruebas, y cuáles son las consecuencias jurídicas que se derivan del incumplimiento de dicha carga; en su criterio clásico la carga de probar se ha fijado en cabeza de quien afirma los hechos que fundamentan la procedencia del reconocimiento de los derechos debatidos, correspondiéndole al mismo, probar sus aserciones para que el juzgador establezca si es procedente el reconocimiento de los derechos que reclama, debiéndose desestimar sus pretensiones en caso de que los hechos no aparezcan probados en el proceso.

El concepto prístino de la carga probatoria se compendia en el aforismo romano *ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat*, según el cual, quien afirma un hecho debe probarlo, y quien lo niega, está libre de la carga de probar, regla procesal que guarda concordancia con las previsiones contenidas en el artículo 167 del CGP, aplicable por remisión analógica a los juicios del trabajo y de la seguridad social, en los términos previstos en el artículo 145 del CPTSS, y por cuya virtud, le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen.

Previo a dirimir la litis planteada, se advierte que no son objeto de discusión los siguientes supuestos fácticos: que la pretensora cotizó para los riesgos de IVM al RPMPD a partir del 22-abr-1988 y hasta el 31-12-2020, acreditando 813,14 semanas (págs.334 a 342, doc.15, carp.01); que COLPENSIONES E.I.C.E. calificó la PCL de la actora en un 38,39%, tomando como fecha de estructuración el 19-agos-2019 y determinando su origen como común (págs.17 a 25, doc.02, carp.01); que la JRCIA varió la PCL a un 52,12%, definiendo el 21-feb-2020 como fecha de estructuración (págs.26 a 33, doc.01, carp.01); que la JNCI en dictamen del 25-feb-2022, confirmó la fecha de estructuración determinada por la JRCIA modificando la PCL a un 47,35% (págs.34 a 45, doc.02, carp.01), y que el médico José William Vargas Arenas en valoración del 29-abr-2019 estimó que la fecha de estructuración del estado de invalidez de la señora GLORIA CECILIA ARIAS ZAPATA corresponde al 15-jul-2017, con una pérdida capacidad laboral igual a 62,92% y por cuenta de las patologías de *“(osteo) artrosis primaria generalizada, diabetes mellitus insulín dependiente sin mención de complicación,*

espondilolistesis, hipertensión esencial (primaria), mialgia, otras formas de enfermedad isquémica crónica del corazón, trastorno mixto de ansiedad y depresión” (págs.46 a 56, doc.03, carp.01).

Adicionalmente, no se discute que en el tracto procesal se practicó una cuarta valoración pericial esta vez a cargo de la Facultad de Salud Pública de la UdeA, entidad que además de ratificar la fecha de estructuración identificada por las juntas calificadores, estimó que la deprecante contaba con un 54,71% de PCL (doc.25, carp.01).

2.3.1. La calificación de la pérdida de capacidad laboral

En lo que respecta a este tópico, conviene colacionar el contenido de los artículos 142 del Decreto 019 de 2012, y 41 de la Ley 100 de 1993, el cual reza que *[c]orresponde al Instituto de Seguros Sociales, Administradora Colombiana de Pensiones -COLPENSIONES-, a las Administradoras de Riesgos [Laborales] – AR[L]-, a las Compañías de Seguros que asuman el riesgo de invalidez y muerte, y a las Entidades Promotoras de Salud EPS, determinar en una primera oportunidad la pérdida de capacidad laboral y calificar el grado de invalidez y el origen de estas contingencias;* pudiéndose acudir a las juntas regionales de calificación de invalidez y a la Junta Nacional de Calificación de Invalidez, en el evento en que uno de los interesados, vale decir, la persona calificada o sus beneficiarios en caso de muerte, la Entidad Promotora de Salud, la Administradora de Riesgos Laborales, la Administradora del Fondo de Pensiones o Administradora de Régimen de Prima Media, el empleador o la compañía de seguros que asuma los riesgos de invalidez, sobrevivencia y muerte, presentasen reproche frente a la fecha de estructuración de la contingencia, su origen o el porcentaje de la PCL asignado; siendo del caso aclarar por la Sala que, en últimas, las controversias que se suscitan en relación con los dictámenes en firme, emitidos por los organismos calificadores, se dirimen por la justicia ordinaria (artículo 44 del Decreto 1352 de 2013).

En ese orden de ideas, el dictamen emitido por las juntas de calificación de invalidez no pueden ser prueba única, solemne o tarifada para determinar la pérdida de la capacidad laboral, pues tal y como lo ha reiterado el órgano jurisdiccional de cierre, el aludido dictamen “...no es más que un experticio que la ley estableció debía ser practicado por determinados entes, lo cual difiere claramente de lo que es una prueba solemne” (CSJ SL-24392 del 29-06-2005, SL31062 del 18-03-2009, SL-35097 del 06-03-2012, SL-351 del 15-05-2013, Radicado 37616, SL-5622 del 09-04-2014, Radicado 52072, y SL-42451 de 2016, SL-877 del 26-02-2020, Radicado 73738, SL-2756 del 29-07-2020, Radicado 72895); línea jurisprudencial en la que además se reiteró que “...al no estar en presencia de un medio probatorio solemne, al Juzgador de alzada le era permitido, conforme a la potestad de apreciar libremente la prueba, acoger aquellos

elementos de convicción que le den mayor credibilidad o lo persuada mejor sobre cuál es la verdad real y no simplemente formal que resulte del proceso, en atención a lo previsto en el artículo 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social”; precisando en las sentencias SL877 de 2020 y SL2568 de 2020 que, *si el juez, para definir una determinada controversia, se ve enfrentado a dos dictámenes disímiles, **podrá escoger para fundamentar su decisión aquél que le merezca mayor credibilidad**, todo, se insiste, dentro del marco de libertad probatoria que le asiste de conformidad con los artículos 51, 54 y 61 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.* -Negritas intencionales de la Sala-

Desde esa perspectiva, al ponderar la Corte Suprema de Justicia el alcance de las conclusiones de los dictámenes de pérdida de capacidad laboral, sostuvo que el juez “... *debe comprender el tema probatorio, primero, desde el perfil científico que lo identifica y distingue, y luego interiorizarlo, arropándolo con el manto jurídico y las consecuentes derivaciones, que provocará la sentencia, sin olvidar que la potencial relevancia de la prueba científica para esclarecer el hecho o para establecer la convicción sobre la verdad del hecho, no es desde luego absoluta [...] No se le puede pedir al Juez que posea una sapiencia igual o superior a la del perito, por lo que el control de la prueba, debe realizarse mediante el análisis del grado de aceptabilidad de los conocimientos entregados o por la racionalidad del procedimiento y conclusiones, ponderando con cautela y guiándose por el esquema racional que le permitirá, a través de las reglas de la sana crítica, calibrar y establecer el mérito del medio persuasivo* (CSJ SC-7817 del 15-06-2016, Radicado 11001310303420050030101).

2.3.2 Del Caso Concreto

Revisado entonces los medios de convicción que fueran copiados al plenario, puede afirmar esta Sala de Decisión, sin ambages ni dubitación, que la decisión adoptada por el juzgador de instancia se estima acertada, toda vez que, según los principios que informan la sana crítica, concluyó la pertinencia e idoneidad del dictamen expedido por la Facultad de Salud Pública de la UdeA, de acuerdo con los demás medios de prueba practicados y estimando aspectos tan trascendentales como necesarios, en lo atinente a **i.** los procedimientos, estándares o métodos científicos utilizados para la valoración; **ii.** el insumo o elementos materiales a los que se acudió para emitir el concepto solicitado, y; **iii.** las condiciones en que fue valorado el estado de salud de la paciente.

Al efecto, debe comenzar por precisar la Sala, que el dictamen en que se apoyan las aspiraciones capitales de la accionante fue elaborado por el médico especialista en medicina laboral y salud ocupacional, profesional de la medicina José William Vargas Arenas, quien detalló que concepto final del dictamen pericial se contrae a los siguientes valores:

CONCEPTO FINAL DEL DICTAMEN	
Valor final de la deficiencia (ponderado) - Título I	41,32%
Valor final rol laboral, ocupacional y otras áreas ocupacionales - Título II	21,60%
Pérdida de la capacidad laboral y ocupacional (Título I + Título II)	62,92%

Así mismo, en diligencia de sustentación del dictamen pericial, el profesional de la medicina afirmó que es especialista en Salud Ocupacional desde 1995 y, actualmente ejerce su profesión de manera independiente. En lo que respecta al estado de salud de la señora ARIAS ZAPATA, informó que el 29 de abril de 2019 se llevó a cabo la valoración médica para determinar la PCL con base en el Decreto 1507 de 2014. Expuso que se trata de una paciente que para esa época había alcanzado los 55 años de edad, su actividad económica era la venta de comestibles, dejando de laborar desde hace 3 años aproximadamente. Resaltó que padece de diabetes mellitus insulino dependiente, cuadro poliarticular (afectación de columna, rodillas y caderas), trastorno mixto de ansiedad y depresión, junto con una patología doble cardiovascular (HTA y enfermedad coronaria con antecedentes de lesión vascular cardiaca) que requirió una cirugía de revascularización. Afirmó que la suma de estas deficiencias arrojo un total de 82,63%, que es igual a un 41,32% del valor total de la PCL. Entretanto, al componente de rol laboral le otorgó un total de 19% [restricciones laborales = 15%; restricciones autosuficiencia económica = 2%; restricciones en función de la edad cronológica = 2%], en razón a que requiere reubicación laboral definitiva, a su edad y por ser económicamente vulnerable. Ahora, al momento en que se le indaga en relación con la fecha de estructuración del estado de invalidez, afirma que se le asignó el 15-jul-2017, de acuerdo con una consulta por especialista de psiquiatría, quien en esa valoración consignó todos los antecedentes patológicos que padece la actora.

Frente al procedimiento para calificar el estado de invalidez por razón de las patologías, explicó que la enfermedad coronaria de la actora se ubica en la Clase 2 de acuerdo con el Manual Único de Calificación de Invalidez –MUCI y los antecedentes médicos; remarcando que la ecografía de marzo de 2015 mostró una disfunción diastólica, a la vez que, la deprecante requirió de una cirugía de revascularización y una angioplastia. Que la enfermedad mental es un trastorno que se define como ansiedad y depresión. Por ello, la calificó como una patología del comportamiento que corresponde al trastorno de ansiedad Clase 1. Adujo que, en la tabla de enfermedades coronarias se muestran 5 clases, iniciando con la Clase 0 que es igual a un

0% de deficiencia y termina en la Clase 5 con un máximo entre 75% y 99%, estando la enfermedad de la deprecante en una Clase 2.

Señaló que, cuando un paciente sufre de diabetes mellitus y es insulín dependiente, la patología se ubica en la Clase 3, mientras que aquellos que padecen esta enfermedad pero que no dependen de la insulina, son Clase 2. Que la señora ARIAS ZAPATA sufre también de osteoartrosis generalizada que compromete las rodillas, cadera y la columna, por lo que debe aplicarse la tabla 14.15 del MUCI que trata de las deficiencias del tejido conectivo (minutos 13:06 a 43:06, doc.52, carp.01)

A su turno, también compareció la médica especialista Martha Lucía Escobar Pérez a sustentar en la vista pública las conclusiones consignadas en el dictamen proferido por la Facultad de Salud Pública de la UdeA (doc.25, carp.01). Con tal propósito advirtió que se realizó una valoración física de la señora ARIAS ZAPATA junto con los documentos que le fueron entregados y que conforman la historia clínica a partir del año 2015. Relató que, la actora sufre de una serie de patologías, algunas de las cuales han mejorado, enfatizando que las enfermedades que fueron objeto de calificación corresponden a diabetes, depresión, hipertensión arterial y los procesos degenerativos espondilolistesis, junto con el capítulo de rol laboral del MUCI; encontrando una PCL igual al 54,71% y una fecha de estructuración del 21-feb-2019. Aceptó que la promotora presentó una enfermedad coronaria en el año 2015 y que requirió una intervención quirúrgica, empero, esta condición no cumple con los criterios para una valoración coronaria en la medida en que, en tratándose de PCL lo que es objeto de calificación son las secuelas y no las enfermedades en sí mismas. De ahí que, al estar controlado el daño y no presentar el corazón alteraciones orgánicas, se excluyó de valoración. Que la fecha de estructuración la obtuvo del concepto médico de rehabilitación expedido por Salud Total EPS el 21-feb-2019, donde se consignó que las secuelas que padece la señora ARIAS ZAPATAS eran definitivas. De la enfermedad de diabetes mellitus insulín dependiente aseveró que aplicó la tabla 8.10 del MUCI, se clasificó como Clase 3 y le otorgó un 25% de deficiencia. Para ello tuvo en cuenta que la paciente se encontraba compensada de acuerdo a la hemoglobina y la glicemia; que la enfermedad del tejido conectivo catalogó de Clase 2, pues encontró osteoartrosis erosiva, resaltando que los cambios artrósicos en las articulaciones se presentan en el cartílago y tiene múltiples causas, entre ellas, la edad (el paso natural del tiempo), un trauma o una enfermedad prolongada. Finalmente, enfatizó que la actora presenta una desviación en la columna que da lugar a una deformidad anatómica (minutos 44:20 a 01:21:04, doc.52, carp.01).

Expuestas las conclusiones de todas las pericias con las que se evaluó el estado de salud de la señora GLORIA CECILIA ARIAS ZAPATA, así como las sustentaciones por parte de los

profesionales de la medicina Marta Lucía Escobar Pérez y José William Vargas Arenas, estima la Sala necesario, debido a su profunda relevancia para zanjar esta controversia, compendiar lo de mayor connotación:

DEFICIENCIA	CAPÍTULO DEL MANUAL - DECRETO 1507 DE 2014	VALOR PORCENTUAL ASIGNADO - MÉD. ESP. JOSÉ WILLIAM VARGAS ARENAS [23-DIC-2019] PÁGS.46 A 56, DOC.03, CARP.01	VALOR PORCENTUAL ASIGNADO - JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA [25-FEB-2022] PÁGS.34 A 45, DOC.02, CARP.01	VALOR PORCENTUAL ASIGNADO - MÉD. ESP. MARTHA LUCÍA ESCOBAR PÉREZ [02-NOV-2022] DOC.25, CARP.01	OBSERVACIONES
Deficiencias por alteraciones del sistema cardiovascular	Capítulo 2	24%	5%	8%	La JNCI sólo evaluó la HTA e indica que "la Sala 4 revisa la historia clínica y no encuentra soportes suficientes para otorgar deficiencia 24% por enfermedad arterial coronaria según la tabla 2.2, para el presente caso le corresponde una deficiencia sin ponderar del 5%". El médico José Vargas Arenas calificó "otras formas de enfermedad isquémica crónica del corazón". La médica Martha Lucía Escobar Pérez sólo calificó la HTA, aduciendo que a pesar de la intervención quirúrgica del año 2015 por enfermedad coronaria, no ha presentado alteración del órgano del corazón.
Deficiencias por enfermedad cardiovascular hipertensiva	Capítulo 2	8%	NA	NA	El médico José Vargas Arenas calificó la HTA
Deficiencias por alteraciones del sistema endocrino	Capítulo 8	30%	25%	25%	La médica Martha Lucía Escobar Pérez afirmó que en derredor a la diabetes mellitus hay reportes de seguimiento y control de la patología de manera periodica junto con las órdenes de los medicamentos acordes a su condición.
Deficiencias por trastornos mentales y del comportamiento	Capítulo 13	20%	20%	20%	NA
Deficiencias por alteración de las extremidades superiores e inferiores	Capítulo 14	49%	10%	12%	El médico José Vargas Arenas calificó la osteoartritis primaria generalizada. En su dictamen se apoyó en dos concepto de rehabilitación expedidos por Salud Total, el primero del 05-dic-2018 y para el segundo no identificó cuando fue expedido. Dejó sentado que "en valoración con reumatología por cuadro de fibromialgia y osteoartritis primaria generalizada con compromiso principal de rodillas, lumbalgia por espondilolistesis espondilítica grado III". La médica Martha Lucía Escobar Pérez advirtió que "[p]or presentar artrosis generalizada, evidenciada en las evaluaciones imagenológicas, se califica la osteoartritis con la tabla 14.15 por presentar varias articulaciones comprometidas y se incluye en la valoración de esta deficiencia los diagnósticos de osteoartritis erosiva generalizada y gonartrosis primaria bilateral".
Deficiencias por alteraciones de la columna vertebral y la pelvis	Capítulo 15	13%	7%	7%	El médico José Vargas Arenas dejó sentado que "en valoración con reumatología por cuadro de fibromialgia y osteoartritis primaria generalizada con compromiso principal de rodillas, lumbalgia por espondilolistesis espondilítica grado III"

Llegado a este punto, se impone recordar que la preceptiva llamada a reglar la valoración probatoria de los dictámenes periciales, se encuentra entre otros, en el artículo 232 del CGP, el cual señala:

“Artículo 232. Apreciación del dictamen. El juez apreciará el dictamen de acuerdo con las reglas de la sana crítica, teniendo en cuenta la solidez, claridad, exhaustividad, precisión y calidad de sus fundamentos, la idoneidad del perito y su comportamiento en la audiencia, y las demás pruebas que obren en el proceso”.

Significa lo anterior que, el juicio de admisibilidad y aun el grado de convicción de la prueba pericial se encuentra determinada por la fiabilidad del ejercicio intelectual del experto, a la vez de la verificación de la existencia de criterios racionales y un nexo coherente y suficiente entre la valoración y la conclusión a la que llegó aquel; aspectos éstos que se muestran robustos y consistentes en el dictamen emitido por la Facultad de Salud Pública de la UdeA. Ello, en

atención a que dicho organismo en el dictamen allegado, justificó con la exhaustividad, precisión y rigurosidad que se reclama en los procesos de esta naturaleza, la pérdida de capacidad laboral y la fecha de estructuración de las enfermedades que padece la solicitante, tomando, entre otros, como elementos demostrativos la historia clínica, los conceptos médicos y las pruebas específicas que reposan en el cartulario, destacándose entre otros, la escanografía neurológica y los conceptos médicos de rehabilitación.

Bajo ese horizonte, nótese que mientras el dictamen sustentado por la médica Martha Lucía Escobar Pérez valoró el estado de salud actual de la señora GLORIA CECILIA ARIAS ZAPATA y explicó las razones que direccionaron valorar únicamente la HTA, excluyendo las demás enfermedades coronarias por cuenta de no mostrar una alteración orgánica del corazón y estar controlada. El profesional Vargas Arenas incluyó estas patologías en la prueba pericial por razón de que la accionante fue objeto de una cirugía de revascularización; empero, no evaluó la recuperación del estado de salud de la actora luego de la intervención quirúrgica o si esta enfermedad produjo una secuela cierta. De manera similar, el perito Varga Arenas NO justificó con suficiencia las ayudas diagnósticas avanzadas o cualquier otro instrumento al que acudió para guiar su valoración y ponderar en un 49% el componente de “[d]eficiencias por alteración de las extremidades superiores e inferiores”; cuando la JNCI y aun la Facultad de Salud Pública de la UdeA coincidieron en asignarle un porcentaje no superior al 13%. Nótese que, de acuerdo con la tabla 14.15 del Decreto 1507 de 2017, a la clase 3 de estas deficiencias se le puede asignar un porcentaje entre el 37% y el 60%, utilizando como criterios de dosificación el grado de severidad que presente el paciente, como se describe a continuación:

CLASE		CLASE 0	CLASE 1	CLASE 2	CLASE 3	CLASE 4
DEFICIENCIA GLOBAL		0	1 - 10%	11-36%	37-60%	61-90%
GRADO DE SEVERIDAD			(A B C) 1 5 10	(A B C) 12 24 36	(A B C) 37 49 60	(A B C) 61 75 90
Historial clínico (factor principal)	Signos y síntomas (<u>para elegir la clase esta variable se deben reunir más del 50% de los síntomas y signos</u>)	No aplica o asintomático	Rigidez matinal (mayor o igual a 1 hora). Artralgias migratorias (mayor o igual a 3 meses).	Rigidez matinal (mayor o igual a 1 hora). Artralgias migratorias (mayor o igual a 3 meses). Sinovitis	Rigidez matinal (mayor o igual a 1 hora). Artralgias migratorias (mayor o igual a 3 meses). Sinovitis. Poliartritis simétrica o migratoria. Deformaciones, desviaciones articulare. Manifestaciones extra - articulares.	Rigidez matinal (mayor o igual a 1 hora). Artralgias migratorias (mayor o igual a 3 meses). Poliartritis simétrica o migratoria. Sinovitis. Deformaciones, desviaciones articulares. Compromiso estado general. Manifestaciones extra - articulares.
Estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas (factor modulador)	Imagenología (RX gamagrafía)	Normales	Sin alteración significativa	Osteoporosis yuxtaarticular, pinzamiento articular, pequeñas erosiones articulares.	Osteoporosis yuxtaarticular, pinzamiento articular, pequeñas erosiones articulares	Artrosis, subluxación, anquilosis fibrosa u ósea.

Tabla 14.15, Decreto 1507 de 2014

El cuadro trasunto, deviene útil para descubrir el desacierto en el ejercicio de valoración del perito Vargas Arenas, en tanto determinó que las deficiencias por enfermedades del tejido conectivo que aquejan a la señora ARIAS TAPIAS eran de clase 3 y tenían un valor y peso del

49%, omitiendo que se debían presentar al menos 4 de los 6 signos o síntomas que se enuncian en la tabla 14.15 [Rigidez matinal (mayor o igual a 1 hora). Artralgias migratorias (mayor o igual a 3 meses). Sinovitis. Poliartritis simétrica o migratoria. Deformaciones, desviaciones articulares. Manifestaciones extra - articulares], junto con los estudios clínicos o resultados de pruebas objetivas que mostraran osteoporosis yuxtaarticular, pinzamiento articular o pequeñas erosiones articulares; signos y pruebas técnico-científicas que no fueron sustentadas por el profesional de la medicina con el soporte acreditativo idóneo; aclarando aquí y ahora que la deformación anatómica que se presenta en el área lumbar se valoró en el acápite de deficiencias por alteraciones de la columna vertebral y la pelvis del MUCI, por lo que esta alteración no podía servirle de parámetro ni antecedente para la ponderación de este componente en la tabla 14.15 del Decreto 1507 de 2014. De manera similar, el dictamen de la JNCI no evaluó el estado actual de salud de la paciente en el componente de rol laboral, reproduciendo las conclusiones a las que arribó la JRCIA, y en razón de todo ello, reviste mayor fuerza suasoria la valoración desarrollado por la UdeA con apoyo en la historia clínica allegada al plenario.

Así lo que queda en evidencia, es que el dictamen de la Facultad de Salud Pública de la UdeA es el que mejor base científica tiene con grado de certeza respecto del estado de salud de la actora, conforme con la historia clínica, la evidencia científica, los exámenes diagnósticos y demás pruebas técnicas pertinentes, en aplicación de los preceptos regulativos de esta materia.

Bajo este presupuesto irrefutable, no merece reparo alguno el ejercicio conclusivo vertido en la decisión hoy revisada, pues en la misma se plasmó de manera racional, conforme a lo dispuesto por los artículos 60 y 61 del CPTSS, los motivos por los que se desestimó el contenido del dictamen pericial adosado con la demanda, lo que dicho sea de paso, también comparte la Sala.

De tal suerte que, para la corporación, no se equivocó la sentenciadora de primer nivel al acoger las inferencias vertidas en el dictamen pericial emitido por la UdeA, y siendo ello así, se impone confirmar en este puntual aspecto la decisión revisada.

2.3.2. De la Pensión de Invalidez

El Sistema Integral de Seguridad Social fue concebido como *“el conjunto de instituciones, normas y procedimientos, a disposición de las personas y la comunidad entera para garantizar un nivel de calidad de vida digna, mediante el cumplimiento progresivo de los planes y programas que el Estado y la sociedad desarrollen para proporcionar cobertura integral a todas las contingencias, especialmente las que menoscaban la salud y la capacidad económica de*

los habitantes del territorio nacional, con el fin de lograr el bienestar individual y la integración de la comunidad” (Ley 100 de 1993, preámbulo).

El Sistema General de Pensiones, fue a su vez diseñado para garantizar a la población colombiana el amparo ante las contingencias de vejez, invalidez y muerte, reconociendo para ello una prestación económica pensional, otorgada por la entidad administradora del régimen al que se hubiere vinculado el afiliado, previo el cumplimiento de los requisitos exigidos por el régimen que resulte aplicable a cada afiliado (artículo 1º de la Ley 100 de 1993).

En ese orden, la Sala denota que, el legislador no previó un régimen de transición en la prestación pensional por invalidez, como si lo estableció para la de vejez en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993. Conforme con lo antes dicho, se exhibe incontrastable que, por regla general, el régimen legal de seguridad social que resulta aplicable para resolver el reconocimiento de esta pensión corresponde al que se encuentre en vigor a la fecha de estructuración del derecho, acogiendo así las reglas de aplicación inmediata de la ley y el efecto retrospectivo propio de las normas de seguridad social.

Valen las referencias anteriores, a fin de denotar que, para que el juez brinde una solución adecuada a la cuestión litigiosa, es deber, *prima facie*, determinar de manera precisa la existencia y vigencia de la normativa que resulte aplicable a la prestación económica por invalidez pretensa y, de consiguiente, verificar la observancia de los requisitos establecidos en ella, para determinar además de la calidad de beneficiario del afiliado, la fecha de causación y disfrute de la pensión solicitada.

Refiere la Sala lo anterior, para recalcar que en el *sub lite* el derecho pensional que se dispensó a favor de la señora GLORIA CECILIA ARIAS ZAPATA encuentra venero en la valoración técnica de la UdeA (doc.25, carp.01), la cual fijó como fecha de estructuración el 21-feb-2019, lo que de suyo implica que, las reglas para determinar la existencia del derecho a la pensión de invalidez, en principio, se encuentran contenidas, para el caso del RPMPD en los artículos 38 y 39 de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 860 de 2003.

En aplicación de las premisas normativas que gobiernan las aspiraciones de la actora, es menester para la prosperidad de las mismas, la demostración en juicio de las siguientes condiciones: **i.** padecer un estado de invalidez, o lo que es lo mismo, haber perdido el 50% o más de su capacidad laboral por cualquier causa de origen no profesional, no provocada intencionalmente (artículo 38, Ley 100 de 1993), y **ii.** que haya cotizado 50 semanas dentro de los últimos 3 años inmediatamente anteriores a la fecha de estructuración.

Así pues, refulge palmar la prueba del estado de invalidez como primer presupuesto al que se hizo mención en el punto retropróximo, teniendo en cuenta una PCL de 54,71% que le fuera asignada a la convocante en el dictamen que en esta oportunidad se le otorgó plenos efectos. De igual manera en el *sub litium*, constituye un hecho irrefutable que la impulsora durante los tres años anteriores a la fecha de estructuración de la invalidez, esto es, por el lapso comprendido entre el 21-feb-2016 y el 21-feb-2019 acreditó un total de 70,86 semanas cotizadas (págs.334 a 342, doc.15, carp.01), cumpliendo con suficiencia los lineamientos para ser destinataria de la pensión por invalidez a partir del 21 de febrero de 2019 a cargo de la COLPENSIONES E.I.C.E, administradora a la que se encuentra afiliada.

2.3.4. La liquidación de la pensión de invalidez

La pensión de invalidez se liquida con el promedio de los salarios o rentas sobre los que cotizó durante los diez años anteriores al reconocimiento de la pensión, o en todo el tiempo, si este fuere inferior, o si hubiere cotizado más de 1.250 semanas, según le resulte más favorable (artículo 21 de la Ley 100 de 1993), y con el 45% del ingreso base de liquidación, más el 1,5% de dicho ingreso por cada 50 semanas cotizadas con posterioridad a las primeras 500, cuando la pérdida de capacidad laboral es igual o superior al 50% e inferior al 66%, o a partir del 54% del ingreso base de liquidación, más el 2% de dicho ingreso por cada 50 semanas cotizadas con posterioridad a las primeras 800, cuando la pérdida de capacidad laboral es igual o superior al 66%, sin que pueda ser superior al 75% del ingreso base de liquidación, ni inferior al salario mínimo legal vigente (artículo 40 de la Ley 100 de 1993). Para calcular el ingreso base de liquidación, la Sala encuentra que, dado el valor porcentual del estado de invalidez y que el IBC no excedió el SMLV, es menester fijar la cuantía pensional en un salario mínimo legal mensual vigente, como así lo estableció la *a quo*.

En el mismo sentido, se evidencia que sobre las mesadas antes descritas no ha operado el fenómeno extintivo de la prescripción, toda vez que, el derecho a la pensión por invalidez se hizo exigible con la declaratoria formal del dictamen practicado durante el tracto procesal el pasado 02 de noviembre de 2022 (doc.25, carp.01) y la demanda fue presentada el 06 de mayo de esa misma anualidad, y, por ende, no podía transcurrir el término trienal de que tratan los artículos 488 del CST y 151 del CPTSS.

Adicionalmente, advierte la Sala que, de conformidad con lo previsto en los artículos 18 y 204 de la Ley 100 de 1993, los aportes para el Sistema General de Salud se liquidan con base en el total de los ingresos que el afiliado hubiere devengado durante el periodo reportado, normativa con base en la cual COLPENSIONES E.I.C.E. queda revestida de la atribución de descontar del retroactivo pensional adeudado, el monto correspondiente para sufragar los

aportes para el Sistema General de Salud, como con acierto concluyó la juzgadora unipersonal de instancia. Finalmente, y habida cuenta que las sumas reconocidas se verán afectadas por la devaluación de la moneda, por razón de que vivimos bajo una economía notoriamente inflacionaria, la indexación pretendida de forma subsidiaria, se constituye en el remedio efectivo a la devaluación de la moneda, *a fortiori*, si se trata de obligaciones propias del sistema de seguridad social que tienen un notorio carácter alimentario (CSJ SL- 11818 del 08-08-1999, reiterada, entre otras, en la SL-54806 del 06-03-2013); no mereciendo reparo alguno lo decidido en este aspecto.

Corolario de lo expuesto, y atendiendo a las consideraciones fácticas y jurídicas antes expuestas, se dispondrá por la Sala la confirmación de la sentencia proferida el 1º de septiembre de 2022 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, en tanto accedió a los pedimentos formulados por GLORIA CECILIA ARIAS ZAPATA en contra de COLPENSIONES E.I.C.E.

3. COSTAS

Teniendo en cuenta que la decisión de primer grado fue revisada en el Grado Jurisdiccional de Consulta en favor de COLPENSIONES E.I.C.E., no se impondrán costas procesales.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN, Sala Cuarta de Decisión Laboral**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

4. RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 1º de septiembre de 2023 por el Juzgado Trece Laboral del Circuito de Medellín, dentro del proceso ORDINARIO LABORAL impulsado por GLORIA CECILIA ARIAS ZAPATA, en contra de COLPENSIONES E.I.C.E., la JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE ANTIOQUIA y la JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ, según y conforme lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.


SEGUDO: SIN COSTAS en esta instancia.

Lo resuelto se notifica mediante EDICTO, aplicando el criterio de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, vertido en la providencia AL2550-2021 del 23 de junio de 2021, M.P. Omar Ángel Mejía Amador.

Déjese copia digital de lo decidido en la Secretaría de la Sala y, previa su anotación en el registro respectivo, DEVUÉLVASE el expediente al Juzgado de origen.

Se declara así surtido el presente acto y en constancia se firma por los que en ella intervinieron.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO
Magistrado Ponente



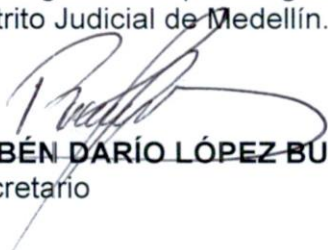
MARÍA EUGENIA GÓMEZ VELÁSQUEZ
Magistrada



CARLOS ALBERTO LEBRÚN MORALES
Magistrado

CONSTANCIA SECRETARIAL

Se deja constancia de que las anteriores firmas corresponden a las firmas originales de los magistrados que integran la Sala Cuarta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín.



RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS
Secretario